

C.A. de Santiago

Santiago, treinta de abril de dos mil veinticinco.

Vistos:

En estos autos Rol Nro. 7399–2023, del Décimo Noveno Juzgado Civil de Santiago, sobre juicio ordinario de hacienda, caratulados “Yáñez con Fisco de Chile”, por sentencia definitiva de primera instancia dictada el 6 de septiembre de 2024, se desecharon las excepciones opuestas por la demandada y se acogió la demanda presentada, condenándose al Fisco de Chile a pagar a la actora, a título de indemnización por daño moral, la cantidad de \$300.000.000, reajustada desde la fecha en que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada hasta su pago efectivo según la variación de índice de precios al consumidor (IPC), debiendo agregarse a tal suma de dinero los intereses corrientes devengados para operaciones no reajustables de dinero a contar desde que la presente sentencia definitiva adquiera su carácter de firme y ejecutoriada, con costas.

En contra de este fallo la parte demandada interpuso recursos de casación en la forma y de apelación.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

I.– En cuanto al recurso de casación en la forma.

Primero: Que como causal de casación en la forma en la que se sustenta el presente arbitrio, el recurrente invoca el numeral 5° del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, “en haber sido pronunciada –la sentencia– con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170”, en relación con el numeral 4° de dicho precepto, esto es, prescindiendo de las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento al fallo.

Afirma, en síntesis, que la sentencia carece de consideraciones de hecho, puesto que omite un razonamiento cabal y suficiente que explique las razones que justificaron fijar el monto del *pretium doloris* en la cantidad en que lo hizo la juez de primera instancia.

Segundo: Que el recurso de casación por el motivo reseñado en el considerando anterior será desechado, toda vez que aún de ser efectivo el yerro que se denuncia, el que eventualmente podría estimarse concurrente en este caso, dado lo escueto del argumento que da pábulo al monto de la indemnización extra patrimonial que se condena pagar al Fisco de Chile, es



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXLYXUMEBMG

menester recordar que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 768, inciso tercero, del Código de Procedimiento Civil, el tribunal podrá desestimar este arbitrio si de los antecedentes aparece de manifiesto que el recurrente no ha sufrido un perjuicio reparable sólo con la invalidación del fallo o cuando el vicio no ha influido en lo dispositivo del mismo. La primera hipótesis en referencia es precisamente la del caso que nos ocupa, en que el recurrente, junto con la casación en la forma, ha interpuesto también apelación, por lo que al resolverse este último recurso que se sustenta, entre otros, sobre similar argumento a aquél que funda la impugnación de nulidad, el vicio formal podrá ser subsanado, lo que determina concluir que tal infracción no es de aquellas remediabiles únicamente con la invalidación del fallo, motivo bastante para desestimar el recurso de casación interpuesto.

II.– En cuanto al recurso de apelación.

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de su considerando vigésimo segundo que se elimina.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Tercero: Que contra la aludida sentencia dedujo recurso de apelación el Fisco de Chile, solicitando se revoque el fallo, declarando que se rechaza íntegramente la demanda interpuesta en autos, o, en subsidio, que se rebaja sustancialmente el monto a título de indemnización por daño moral, a la suma que esta Corte estime conveniente, desestimándose la condena en costas.

Cuarto: Que, examinado su recurso, se observa que los agravios alegados son básicamente tres. Por el primero de ellos rebate lo decidido por la sentenciadora en cuanto desestima la excepción de reparación integral, insistiendo que, con los antecedentes reunidos en el juicio, en particular el oficio del IPS, agregado al proceso, se da cuenta que la actora ha recibido por concepto de pensión y otros beneficios un total de \$ 41.214.492 y una pensión vitalicia de \$277.270., por lo que se debería haber accedido a dicha excepción.

El segundo radica en haber desestimado el fallo la excepción de prescripción, por cuanto, en su concepto, debió acogerse dicha alegación, ya que en sede civil la acción intentada no es imprescriptible, como lo razona la sentencia; por el contrario, la acción civil deducida prescribe como cualquier acción de esa naturaleza y cita jurisprudencia al afecto.



El tercero lo hace consistir en que el monto del daño moral regulado no se sustenta ni respalda con la prueba rendida, para lo cual compara la suma a que fue condenado su representado en esta causa con otros casos de torturas.

Quinto: Que en lo que respecta al primer aspecto, concuerda esta Corte con el fallo en alzada, en su considerando décimo primero, en cuanto a que la indemnización por daño moral solicitada por esta vía es compatible con los beneficios y pagos ya percibidos por la demandante, en virtud de la normativa antes citada, pues esta acción tiene por objeto mitigar el daño individual del afectado, esto es, demandar el daño propio, lo que se traduce en el dolor, angustia y sufrimiento experimentado, a raíz del periodo en que estuvo detenida en el cual fue objeto de torturas y vejaciones por agentes del Estado, situación que fue reconocida por la Comisión Valech, que lo incluyó como una de las víctimas de torturas, con el Nro.26.785, como se desprende del documento allegado al proceso. De esta forma, solo cabe confirmar lo decidido en la sentencia en este aspecto.

Sexto: Que, en lo atinente a la prescripción extintiva, también coincide este tribunal de alzada, con lo manifestado por la sentenciadora de primer grado en los motivos décimo segundo a décimo cuarto, en el sentido que tratándose la tortura un crimen de lesa humanidad, proscrito por Tratados Internacionales vigentes en nuestro país, como son la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, no cabe acoger la prescripción alegada por el Fisco.

En efecto, de todos esos instrumentos internacionales se deriva que la acción civil para pedir la reparación del daño causado a las víctimas, a consecuencia de las torturas que le fueron impuestas en su momento, es imprescriptible, razón por lo que no tienen aplicación las normas del derecho interno, en especial el Código Civil, toda vez que la fuente que da origen a la reparación descansa en Tratados Internacionales de Derechos Humanos que deben ser aplicados con preferencia a las normas del Derecho Interno, por expreso mandato constitucional del artículo 5° inciso 2° de la Carta Fundamental.



Séptimo: Que en lo relativo a la prueba del daño moral, si bien no fueron aportados por la demandante, antecedentes específicos sobre su persona que permitieran reconstruir lo padecido por ella y saber algo más sobre sus secuelas, ya que todo lo reseñado en el considerando sexto del fallo en alza son antecedentes generales, lo cierto es que, al menos, ha quedado establecido con el documento 17 del folio 28 que ella se encuentra registrada con el Nro.26785 como víctima de violaciones a los derechos humanos y validado así por una Comisión Oficial; y, que tales hechos acontecieron en una etapa de su vida en que siendo mujer y joven, es posible situar su sufrimiento en una privación de libertad injusta cuyo impacto la ha acompañado toda su vida, al punto de conminarla a accionar judicialmente para pedir una reparación.

Octavo: Que en lo que atañe al pago de las costas de la causa, cabe reflexionar que conforme dispone el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, puede eximirse de su pago a la parte que ha litigado con motivo plausible, circunstancia que se aprecia en este caso, respecto del Fisco de Chile, atendida la naturaleza de la acción deducida en su contra.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas y en los artículos 186 y siguientes y 765, 766 y 783, del Código de Procedimiento Civil, se declara que:

I.- Se **rechaza el recurso de casación** en la forma deducido por la parte demandante en lo principal de la presentación correspondiente al folio 38.

II. Se **revoca** la sentencia apelada de seis de septiembre de dos mil veinticuatro, dictada por el Décimo noveno Juzgado Civil de Santiago en los autos Rol Nro. 7399-2023, en cuanto condena a la parte demandada al pago de las costas de la causa y, en su lugar se resuelve que aquella queda eximida de dicha carga;

III.- Que se **confirma** la referida sentencia, **con declaración** que la suma que se condena pagar al Fisco de Chile al actor asciende a la suma de veinte millones de pesos (\$20.000.000) a título de daño moral, cantidad que deberá ser pagada con los reajustes e intereses decididos en el fallo.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la ministra (s) Karina Ormeño Soto.

Rol Corte Nro. 18461-2024 (Civil)



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXLYXUMEBMG



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXLYXUMEBMG

Pronunciado por la Undécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Romy Grace Rutherford P. y los Ministros (as) Suplentes Lidia Poza M., Karina Irene Ormeño S. Santiago, treinta de abril de dos mil veinticinco.

En Santiago, a treinta de abril de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXLYXUMEBMG